

Concepción de Chile en el tránsito a la democracia

Bernardo Castro Ramírez

Universidad de Concepción

Resumen: El artículo estudia el proceso de transición a la democracia en Concepción (Chile) durante el primer gobierno de la Concertación e inicios del gobierno de Eduardo Frei, y analiza cómo el modelo de la transición a la democracia en Chile condicionó la construcción democrática en Concepción, atendiéndose a sus particularidades regionales y, también, al conflicto que termina por imponer el diseño de una elite central sobre el poder local y regional que excluye la participación ciudadana del proceso transicional. El papel de los sujetos sociales en la dinamización de la etapa de estudio, y las críticas formuladas a las formas institucionales del cambio político, así como las consecuencias en Concepción de la política económica de los gobiernos de la transición, son también objeto de análisis en este artículo que, por último, plantea la defensa de los Derechos Humanos desde la sociedad civil como tema pendiente aún de la transición chilena.

Palabras clave: transición, Concepción, agentes sociales, política económica, derechos humanos.

Abstract: The article studies the process of transition to democracy in Concepcion (Chile) during the first government of the Concertacion and early government of Eduardo Frei, and discusses how the model of transition to democracy in Chile determined the democratic construction in Concepcion, attending to its regional particularities and also the conflict that ends for imposing the design of a central elite on the local and regional power that excludes the civil participation of the transitional process. The role of the social actors in the revitalization of the stage of study and the criticism of the institutional forms of political change, as well as the

consequences of the economic politics of the governments of the transition in Concepción are also analyzed in this article that finally raises the defence of human rights from civil society as yet unresolved issue of the Chilean transition.

Keywords: transition, Concepción, social agents, economic politics, human rights.

La transición a la democracia en Chile y su reflejo en Concepción

Este estudio sobre la transición en Concepción (Chile) abarca el periodo de inicio del primer gobierno de la Concertación, el de Patrio Aylwin Azocar, del 11 de marzo de 1990 al 11 de marzo de 1994, e incluye también parte del inicio del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, para apreciar la continuidad del diseño inicial de transición de los años noventa. Una transición en la que la historiografía chilena resalta las movilizaciones políticas¹, las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales regionales en la escala nacional y local, que desempeñaron un rol central en la deslegitimación y término de la dictadura militar. Las dos reivindicaciones centrales de esta lucha fueron el cambio del modelo económico neoliberal y la no aprobación de la Constitución de 1980. Sin embargo, la negociación de la clase política con la derecha y la dictadura militar marcaron el fin del protagonismo de los movimientos sociales, cuando la negociación de la clase política implicó la aceptación del modelo económico neoliberal y la aprobación de la legitimidad de la Constitución de 1980: «Como recordarán se planteaban dos estrategias posibles:

¹ Este artículo es resultado del trabajo realizado en el seno del Proyecto de Investigación HUM2007-63387, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación, Proyectos I+D (2007-2010). Sobre la evolución de la acción política de socialistas y comunistas contra la dictadura, véanse LOYOLA, M., y ROJAS, J. (comps.): *Por un rojo amanecer. Hacia una historia de los comunistas chilenos*, Santiago de Chile, Impresora Valus, 2000; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, E.: *Ciudades en las sombras. Una historia no oficial del Partido Socialista de Chile, 1970-1990*, Santiago de Chile, PUBLIPROM, 2003; VALDIVIA, V.; ÁLVAREZ, R., y PINTO, J.: *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)*, Santiago de Chile, LOM, 2006, y VENEGAS VALDEBENITO, H.: «El Partido Comunista de Chile. La crisis de la Unidad Popular y la trayectoria de la política de Rebelión Popular de Masas», *Historia Actual*, 6 (2008), pp. 35-55.

la estrategia de la protesta, de la confrontación, del paro general que llevara a derribar la dictadura; o la estrategia de utilizar la institucionalidad y derrotar la dictadura en su propia legalidad. En definitiva, fue progresivamente ganando esta última tesis»².

En América Latina y en Chile, las dictaduras militares debieron ceder a la presión de los movimientos sociales y empezaron a surgir regímenes democráticos que conservaron algunos elementos centrales de la cultura autoritaria en la institucionalidad del Estado. Desde la perspectiva política, la transición en Chile se vio bloqueada por enclaves autoritarios, amparada en una Constitución, la de 1980, que fue plebiscitada en condiciones no democráticas y que, salvo algunas modificaciones, es la que rige hasta el día de hoy la nación. Algunos enclaves autoritarios fueron, y son, por ejemplo, la permanencia de un sistema binominal que deja excluidos de participación a vastos sectores políticos de la sociedad chilena, y que altera la voluntad popular al permitir que sólo dos grandes coaliciones protagonicen, alternen y se disputen el poder político en Chile.

Otros enclaves del periodo de transición que podemos mencionar son: la persistencia de senadores designados hasta el año 2005; la permanencia del Consejo de Seguridad Nacional, que ponía un tutelaje a la democracia inicial, con cuatro comandantes en jefe que podrían llamar, interpelar y poner sobre aviso al presidente de la República para presentarle sus disconformidades sobre la alteración del orden público; las leyes orgánicas constitucionales que requieren un quórum calificado, y no simple mayoría para cambiarlas, entre ellas la ley de las Fuerzas Armadas, la LOCE, o Ley Orgánica Constitucional de Educación, el Código de Aguas (privatización de las aguas en Chile), y el Código Laboral (que impide la negociación colectiva), entre otras leyes orgánicas. Un abordaje especial entre estos enclaves lo constituye la vigencia de una Ley de Amnistía que «extingue por completo la pena y sus efectos»³, generando impunidad por la violación de los derechos humanos en Chile. Finalmente, el hecho más inédito y posible en la historia de alguna transición: el dictador Augusto Pinochet, tras la entrega del gobierno en 1990 al centro-izquierda concertacionista, permanece como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas

² BENGOA, J., y TIRONI E.: «Una mirada retrospectiva: entrevista a don Patricio Aylwin Azócar», *Proposiciones*, 25 (1994), pp. 12-19.

³ Decreto Ley núm. 2191/1978, de la Junta de Gobierno Militar.

hasta el año 1997⁴. Con estos antecedentes y enclaves sostuvimos en trabajos anteriores que «en Chile los enclaves autoritarios hacen difícil hablar de una democracia al estilo clásico, por ello el gobierno de la Concertación se planteó en 1990 ampliar la democracia y volver a democratizar el país»⁵.

Atendiendo a estas razones, también el sociólogo Tomás Moulian⁶ considera que la Constitución de 1980 es, en definitiva, «una jaula de hierro» que impide la democratización política del país y hace imposible la democracia. En este sentido, este autor afirma que sí existe una excepcionalidad chilena, pero ella no consiste en la fortaleza de la cultura democrática, ni menos aún en la profundidad de la democratización, sino, al contrario, radica en las imperfecciones de ésta: «el caso chileno es aquel en el cual se logra preservar el edificio institucional del autoritarismo, a través del esquema de la “democracia protegida”, consagrada por la Constitución de 1980»⁷.

Además, la continuidad del modelo neoliberal tiene sólo una variante durante el gobierno de la Concertación: en este periodo, lo que se critica es el impacto social que la política económica genera durante la dictadura, sin embargo, «no plantea transformaciones estructurales en términos de política industrial o tecnológica, reforma del sistema financiero, de redefinición de la inserción exterior, etcétera, [...] al contrario, deja intocable estos planos, y se plantea su tratamiento a través de políticas de gastos fiscal social que actúa *ex post*, esto es, al margen del proceso productivo. Dicho de otro modo, no busca una redistribución del ingreso, modificando las causas explica-

⁴ El dictador Augusto Pinochet, al término de su mandato en 1997 como comandante en jefe, se convierte en senador vitalicio, como lo establecía la Constitución de 1980, y con esta condición, en 1998 tiene lugar su arresto preventivo en la Clínica de Londres debido a una orden de arresto internacional emanada del juez español Baltasar Garzón. De la misma forma, es ahí donde empiezan los esfuerzos del gobierno de la Concertación para liberar a Pinochet de la justicia internacional.

⁵ CASTRO, B.: «La mirada regional de la modernización», *Vida y Derecho*, 15 (1994), pp 26-29.

⁶ MOULIAN, T.: *Chile actual. Anatomía de un mito*, Santiago de Chile, LOM, 1997.

⁷ MOULIAN, T.: *Contradicciones del desarrollo político chileno, 1920-1990*, Santiago de Chile, LOM, 2009, p. 119. El autor señala que en Chile no se produjo, después de la dura derrota plebiscitaria de Pinochet, el dictado de una nueva Constitución, como en España, sino una negociación superficial y cosmética, en la cual los sectores democráticos negociadores se debieron regir estrictamente por la lógica del mal menor. *Ibid.*, p. 120.

tivas»⁸. Al parecer, los esfuerzos consistieron en paliar y compensar a las víctimas de un sistema económico concentrador y excluyente, con el resultado de más de cinco millones de pobres en una población de poco más de trece millones de personas a comienzos de los años noventa.

Desde el punto de vista social, el diseño de la transición excluyó, ya en su inicio, la participación ciudadana en los asuntos públicos. En este sentido, el concepto de gobernabilidad aparece como el eje ordenador de inicio de los años noventa:

«Frente a las disonancias de la joven democracia chilena —los llamados “enclaves autoritarios” y producto del rescate de la Constitución de 1980—, la noción de “gobernabilidad” nos parece, en efecto, desempeñar un papel de discurso ordenador. Al articular un relato aceptable de democracia “moderna” donde la capacidad de gobernar no puede sino provenir de poder tecnocrático y estable, el registro de la “gobernabilidad” aparenta resolver las contradicciones de la transición democrática chilena»⁹.

Así, transición y gobernabilidad se hacen sinónimos, cuyo valor central es la estabilidad, que tiene como base los consensos desde arriba, evitando las discrepancias, las críticas y el conflicto. En consecuencia, desarticular social y políticamente la ciudadanía es una condición para la gobernabilidad, como reconoce en su testimonio oral un líder sindical de la época:

«En el diseño político de la transición no estaba la idea de generar un diálogo con la sociedad civil ni tratar de darle a ésta un papel activo. Para volver a democratizar esta sociedad, más bien se enfatizó en la idea de trabajar para la gente... y no con la gente, lo que trae como consecuencia una política marcadamente asistencialista, que de alguna forma, llevó a la deconstrucción del sujeto político social»¹⁰.

⁸ ARRIZABALO, X.: *La economía chilena durante la dictadura. Milagro o quimera*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995, p. 267.

⁹ BAEZA, C.: *Los discursos públicos sobre la gobernabilidad en Chile*, 2008, en <<http://nuevomundo.revues.org/11042>>.

¹⁰ Testimonio oral de Mauricio Laborde, dirigente sindical y de ONG, ex director del Servicio de Estudios Regionales. Los testimonios orales que se insertan en este artículo han sido recabados por el autor a partir de entrevistas a «Informantes Claves, Proyecto de investigación *España y Chile: similitudes y diferencias en la transición a la democracia. Análisis comparado en las ciudades de Murcia y Concepción*».

Es así como todo el potencial social construido durante la dictadura militar en el mundo sindical, en la cultura, en la diversidad sexual, con los pobladores, con las mujeres, etcétera, se hace invisible y pierde un rol activo en la decisión de los asuntos públicos: «Había una construcción social mucho más dialogante y mucho más respetuosa de la diversidad pero había una élite o clase política que sentía que darle participación a esa base social era prácticamente poner en riesgo toda la arquitectura que ellos habían consensuado con los poderes fácticos»¹¹.

Desde una mirada sociocultural, es necesario destacar también el rol que desempeñaron las revistas y los diarios de oposición durante la dictadura militar, cuando éstos acompañaban y facilitaban la expresión del movimiento social. Durante el primer gobierno de la Concertación no logró sobrevivir ninguna de estas publicaciones. Pulitzer incluyó esta denuncia en su estudio: «Después de más de tres años de transición democrática, queda el sentimiento en el gremio periodístico de que el gobierno no hizo nada por apoyar las publicaciones que tuvieron importante papel en la lucha por la democracia. Si se hace un recuento de lo que sucedió con las revistas *Análisis*, *Cauce*, *APSI* y *Hoy*, y con los diarios *Fortín Mapocho* y *La Época*, pareciera que existió un plan destinado a cerrar estas publicaciones más a que a proteger su desarrollo independiente»¹². Estos medios de comunicación tenían cobertura nacional y, según denuncia el ex director de la revista *Análisis*, una de las de mayor cobertura nacional durante la dictadura militar, existió una política, de parte del gobierno, para su extinción¹³.

El cierre de estos medios de comunicación, que informaban del quehacer de los movimientos sociales y que estaban también en clara sintonía con las demandas ciudadanas y la sociedad civil, constituyó

¹¹ *Ibid.*

¹² PULITZER, J.: «Diez recetas para matar la prensa libre», *Punto Final* (junio de 1993), pp. 8 y 9.

¹³ «Se dice que “el mercado” mató a *Análisis* y otras publicaciones, lo que es una mentira que nos insulta y hierde. Felizmente es el paso del tiempo el que reconoce que de verdad la estrategia comunicacional del primer gobierno de la transición fue lisa y llanamente la política de exterminio de los medios de comunicación que lucharon contra la dictadura. El cierre de *Análisis*, como se puede acreditar, fue objeto de un operativo diseñado y ejecutado desde la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior para tomar su control y posteriormente decretar su clausura». Véase CÁRDENAS, J. P.: «Nosotros, los de entonces», *Análisis* (diciembre de 2007), pp. 2 y 3.

un duro revés para el avance del movimiento social. Con ello se agravó aún más la falta de pluralismo ideológico y político de la naciente democracia, y se consolidó la tendencia a la concentración de los medios —que se había iniciado en la dictadura militar— en dos grandes grupos de derecha que fueron el soporte comunicacional de la derecha pinochetista: el duopolio de Agustín Edwards, con su cadena de *El Mercurio*, y de Álvaro Saieh, con su cadena de *La Tercera*¹⁴.

De esta forma, en Chile quedó pendiente la democratización social fundamentada en cambios profundos que posibilitaran una mayor igualdad de oportunidades y la participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado y de los gobiernos locales, como pretendía el movimiento popular y social que luchó contra la dictadura militar. La transición a la democracia adquirió así varios adjetivos que califican la falta de sustancia de la democracia naciente: «democracia protegida»¹⁵, «democracia vigilada»¹⁶, «democracia ordenada»¹⁷, «transición o transacción democrática»¹⁸. Esto caracterizó al primer periodo de la Concertación, y a sus futuros gobiernos.

Particularidades de la transición a la democracia en Concepción

La Ciudad de Concepción se ubica a quinientos kilómetros de la ciudad de Santiago de Chile. A su vez, Concepción es la ciudad-capital de la región del Bío-Bío, un territorio predominantemente industrial donde el impacto productivo está focalizado por la industria del acero, la petroquímica, la industria pesquera y la forestal. A comienzos de los años setenta, tenía un alto número de obreros industriales y trabajadores de la minería del carbón. La orientación aperturista que, a partir del año 1975, toma la economía nacional, fortaleció e hizo sobresalir al sector forestal y pesquero. Adicionalmente pode-

¹⁴ MONCKEBERG, M. O.: *Los magnates de la prensa. La concentración de los medios de comunicación en Chile*, Santiago de Chile, Debate, 2009.

¹⁵ FERNÁNDEZ, A., y FOLLE, F.: «Burocracia militar y transición a la democracia en Chile», *Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 45 (1988), pp. 3-28.

¹⁶ ARRIZABALO, X.: *Milagro o quimera. La economía chilena durante la dictadura*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995.

¹⁷ OSORIO, J.: «La democracia ordenada. Análisis crítico de la nueva sociología latinoamericana», *Proposiciones*, 22 (1993), pp. 210-225.

¹⁸ GUMUCIO, R.: *Apuntes de medio siglo*, Santiago de Chile, Ediciones Chile-América/CESOC, 1994.

mos decir que ésta es una región con una fuerte identidad cultural ligada a las luchas sociales.

Históricamente, la región del Bío-Bío es una región que se construye, permanentemente, en conflicto y en contraposición con el poder central. Se le describe e identifica como una región particular, en su identidad y en su carácter pionero, y por su historia y la riqueza y diversidad de sus recursos naturales. Sin embargo, la dictadura militar dejó a esta región sumida en la pobreza y en la desindustrialización. En la crisis de 1982, por ejemplo, perdió alrededor de ocho mil empleos industriales.

A principios de 1990 se construye una *Estrategia de Desarrollo para la Región*¹⁹ desde la participación de los ciudadanos y en consulta con organizaciones sociales, sindicatos, movimientos sociales, etcétera. En el documento se señala: «La nueva democracia que hay que construir en el país no puede circunscribirse al buen funcionamiento de las instituciones públicas fundamentales, como son el gobierno, el Parlamento, los partidos políticos, etcétera. Si no es la sociedad entera la que se organiza y articula democráticamente... se pretende que el principal protagonista de la renaciente democracia sea la sociedad civil, más que el Estado»²⁰.

La elaboración participativa del documento, y la construcción de este camino a la democracia, «contó con el apoyo decidido y constante del propio intendente regional, Adolfo Veloso»²¹. El aporte en la elaboración de la citada Estrategia Regional, por parte de los movimientos sociales, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), PYMES (Pequeña y Mediana Industria y Empresas Regionales) y los movimientos regionalistas, expresaba intereses de gremios y corporaciones pero, también, los intereses de la sociedad civil en su conjunto. En aquellos primeros años de transición a la democracia, el intendente de la región, Adolfo Veloso, expresaba, en concordancia con la *Estrategia de Desarrollo para la Región*, lo siguiente: «Los grandes pilares del desarrollo están constituidos en definitiva por las capacidades, energías y esfuerzos de la gente del Bío-Bío y por la potencialidad y variedad de los recursos naturales de la zona; en los objetivos estratégicos de nuestro desarrollo, y en un vigoroso dinamismo socio-

¹⁹ INTENDENCIA REGIONAL DEL BÍO-BÍO/ILPES/ONU: «La Región del Bío-Bío, al encuentro del siglo XXI», Ciudad de Concepción, 1991.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

cultural promovido e incitado por un renovado sistema educativo y por el proceso de profundización democrática»²².

Sin embargo, el diseño de la transición a escala nacional entró en conflicto con esta perspectiva regional y local, y terminó por imponerse el diseño de una élite central sobre el poder local que excluía la deseada participación ciudadana y que daba continuidad a la política económica desplegada desde los tiempos de dictadura. Algo que, particularmente en esta región, se expresó en los efectos de la bajada de aranceles para la importación de carbón, con el fortalecimiento de la apertura de la economía en la inserción internacional. Todas estas medidas, junto con la cancelación de las bases de la estrategia de desarrollo adoptada, potenciaron una continuidad de la política económica post-dictadura que profundizó mucho más la crisis del carbón y la crisis de impacto sobre el medio ambiente y, de paso, transformó la pobreza y el desempleo regional en un problema estructural en la región, hasta nuestros días.

La crisis del sector minero carbonífero se remonta a la crisis económica de 1982-1983, y la falta de competitividad se agravó con la bajada de aranceles de importación de carbón en el año 1990, que bajó del 16 al 10 por 100. Con estos bajísimos aranceles, los competidores extranjeros apostaron por reducir los precios de venta. El ejemplo de Colombia es uno de estos casos particulares, que logró bajar de cincuenta a cuarenta dólares la tonelada del carbón, dejando a las empresas carboníferas nacionales sin ninguna posibilidad de competir ante estas evidentes desventajas. Como parte de las consecuencias de las medidas mencionadas, durante 1992, más de tres mil seiscientos mineros fueron despedidos de las empresas: «Tres mil seiscientos ochenta y tres mineros, se marcharon durante 1992 de las tres grandes empresas mineras del carbón, ENACAR, Schwager, y CARVILE», informó el secretario regional ministerial de Minería, Juan Pablo Astudillo»²³. Éste fue el «comienzo de un sinfín de eventos» que vendrían a terminar con este sector de la minería del carbón, históricamente tan importante desde el aspecto productivo, como desde el cultural, para Concepción y la región del Bío-Bío. Durante los años

²² «La región del Bío-Bío a un paso del año 2000», *El Sur*, entrevista al intendente regional Adolfo Veloso en edición aniversario del *Diario Regional*, 15 de noviembre de 1991.

²³ Entrevista al secretario regional ministerial de Minería, Juan Pablo Astudillo, *El Sur*, 17 de diciembre de 1992.

venideros se terminaron de cerrar el resto de empresas mineras, finiquitándose el empleo para dos comunas claves de la región, como son las de Lota y Coronel, que permanentemente lideran el ranking en índices de desempleo y pobreza a nivel nacional.

El problema ambiental también alcanza su crisis en la región. Hay que considerar que ésta es una región con importantes cuencas hidrográficas, que abarcan más de la mitad de la superficie regional (24.260 kilómetros). La contaminación de las aguas y ríos por el desarrollo indiscriminado y sin control de algunos sectores productivos se transforma en un problema mayor para los impactos ambientales de las cuencas: «El desarrollo económico e industrial de la región del Bío-Bío, ha sido hasta hoy gracias al río Bío-Bío. Si continuamos contaminándolo estamos matando la fuente de la riqueza, y ¡aún estamos a tiempo...!»²⁴.

La Comisión Regional del Medio ambiente (COREMA), junto con la Intendencia Regional, publicaron en 1992 un estudio titulado *Recursos y contaminación en la Región del Bío-Bío* en el que se señalaba que la región «presenta hoy serios problemas de contaminación que están degradando sus recursos naturales y afectando la calidad de vida de sus habitantes»²⁵. Otro conflicto central ambiental fue la instalación de la Central Hidroeléctrica PANGUE, S. A., en el interior del río Bío-Bío, en territorio de pueblos originarios Mapuche-Pehuenche. El proyecto de la central hidroeléctrica PANGUE, S. A., que realizó la empresa de Electricidad ENDESA, inundó quinientas hectáreas de superficie de las comunidades indígenas pehuenches y, con ello, cementerios sagrados de sus antepasados. Esta presa se diseñó para producir 450 megavatios como «presa de punta»²⁶, cuya puesta en marcha, según un estudio del Centro EULA de la Universidad de Concepción, secaría completamente el río en algunos periodos, en tramos de cinco a quince kilómetros, algo que también afectaría río abajo a numerosas poblaciones y canales de regadíos, violándose el caudal mínimo.

²⁴ Artículo de opinión de destacados expertos, técnicos y científicos en temas de contaminación, entre ellos el doctor Óscar Parra, actual director del centro EULA, Universidad de Concepción. Véase *Tiempo Regional*, 11 (1991), p. 7.

²⁵ COREMA-INTENDENCIA REGIONAL: «Recursos y contaminación en la región del Bío-Bío», Ediciones Intendencia Regional, 1992.

²⁶ Central de punta es aquella que acumula agua durante un cierto lapso, secando así el cauce aguas abajo. Central de pasada, aquella que genera electricidad en forma continua con el caudal que ingresa al embalse, impidiendo que se seque el río.

En la región, junto a sus organizaciones sociales respectivas, la oposición a este proyecto fue tenaz, incluyendo la oposición del Parlamento²⁷. Entre muchas de las acciones para evitar la ejecución del proyecto hidroeléctrico encontramos la de la Junta de Caciques del Bío-Bío, que realizó una declaración, suponiendo la tramitación en tribunales del respectivo recurso de protección en contra de PANGUE, S. A.: «Rechazamos enérgicamente la construcción de la Central PANGUE, S. A., y de la llamada Central Ranco, por ser proyectos impuestos por la empresa privada con autorización del gobierno. A este respecto no se nos ha consultado, ni menos informado, y sin embargo somos los directamente afectados con las inundaciones y los futuros desplazamientos»²⁸.

A pesar de la lucha de los organismos y los gremios sociales, de los movimientos ecologistas del momento y del apoyo de los parlamentarios de la región, el gobierno central impuso la construcción de las hidroeléctricas, y con ello devino la serie de impactos no sólo ambientales, sino también de aquellos que hoy determinan, poderosamente, el conflicto étnico que subyace en la región.

El problema de la pobreza y el desempleo en la zona es otro de los factores estructurales heredados y agravados durante la dictadura militar, y la resolución de esta problemática durante los primeros años de la Concertación ha sido muy lenta. La pobreza regional observa una lenta disminución durante el gobierno de la Concertación de 1990-1994. No obstante, a nivel nacional, las estadísticas son más positivas: bajó del año 1990 (40,1 por 100) a 1992 (32,7 por 100). En contraposición, el caso de la comuna de Talcahuano en la región del Bío-Bío es paradigmático, pues en 1994 tenía 239.000 habitantes, y de ellos el 47,5 por 100 vivía en situación de pobreza. Para el alcalde de la época, Leocan Portus, «es una contradicción que, siendo este puerto el que genera casi la mitad de la riqueza para

²⁷ La honorable cámara de diputados en Sesión núm. 56, del 18 de marzo de 1993, elaboró un *proyecto de acuerdo* que ordenaba revisar el proyecto Pangué. En intervención del senador Mariano Ruiz Ezquide, del 5 de enero de 1993, se opuso al proyecto por considerar que no cumplía los requisitos ambientales. El diputado Octavio Jara W. intervino el 12 de enero del 1993 en la cámara de diputados oponiéndose al proyecto debido a que la instalación de la hidroeléctrica iba a afectar a cinco mil indígenas que vivían en el lugar.

²⁸ «Declaración de la Junta de Caciques del alto Bío-Bío a las autoridades del Estado de Chile y a la opinión pública», Santiago de Chile, 9 de diciembre de 1992.

la región del Bío-Bío, tenga un 47,5 por 100 de habitantes en condiciones de pobreza»²⁹.

Durante 1994, un total de 28 comunas, de las 48 de la región, fueron incluidas en el listado de comunas prioritarias del programa nacional de superación de la pobreza que, a nivel nacional, incluía 56³⁰. El desempleo regional, hacia 1994, rondaba el 7,4 por 100 de una fuerza de trabajo regional de un total de 641.000 habitantes. Pero en algunas comunas el índice de desempleo alcanzaba las dos cifras, con un índice cercano al 16 por 100 en comunas como Lota y Coronel, que se resentían de los efectos de la crisis del carbón³¹. Estos dos problemas impiden que el crecimiento económico regional sea sostenible, porque las exportaciones de la región (centradas principalmente en productos del sector forestal y pesquero) están basadas en explotación de recursos naturales y con poco valor agregado. Además, los costos ambientales para la región son muy altos, por la contaminación costera y por la evacuación de aguas servidas. También, a ello, se añade el bajo valor de los salarios. En definitiva, hablamos de una región con altas brechas de desigualdad, con una minoría de habitantes de gran poder económico y una mayoría muy empobrecida, producto de una histórica desigualdad en la distribución de los ingresos³².

²⁹ *El Sur*, 15 de noviembre de 1994.

³⁰ *El Sur*, 20 de septiembre de 1994.

³¹ UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN: «La desocupación regional aún por sobre los índices nacionales», *Informe Económico Regional*, 19 (1994), pp. 21-27.

³² En Chile, la mala distribución del ingreso no se ha alterado en los veinte años de gobiernos de la Concertación. Hoy, en los hogares chilenos, el 20 por 100 más rico percibe el 56,5 por 100 del ingreso nacional, y el 20 por 100 de los hogares más pobres el 3,9 por 100. La reducción de la pobreza a nivel nacional del 45 por 100 en 1987, al 19 por 100 en 2005, se debe principalmente al creciente fortalecimiento de las políticas sociales y el aumento en gasto social. Cerca del 70 por 100 del presupuesto nacional se emplea en políticas sociales de apoyo a la educación, salud, jóvenes, niños, mujeres, tercera edad, personas con discapacidad, población indígena, etcétera, logrando de esta forma paliar los efectos de la políticas económicas sin alterar la distribución del ingreso. Actualmente en Chile, según la encuesta CASEN 2006, el 70 por 100 de la población vive con un sueldo de menos de 324.000 pesos (435 euros), y el 30 por 100 de la población vive con un sueldo de más de 324.000 pesos.

Los actores sociales en la construcción democrática

La lucha contra la dictadura en Concepción estuvo marcada por la presencia activa y decidida de actores políticos diversos, como los partidos políticos de centro-izquierda, los movimientos sociales, diversas formas de organización por parte de la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales. También, de alguna forma, contó con la presencia reactiva de un empresariado industrial, de larga tradición en la región, que tuvo discrepancias con la dictadura desde una perspectiva más regionalista, y que se vio afectado por una política económica neoliberal que no le favoreció en absoluto y por la difícil situación local a la que tuvo que enfrentarse desde la crisis económica de 1982, cuando la región pierde aproximadamente 8.000 empleos industriales. El empresariado regional mantendrá durante los años noventa importantes conflictos con el poder central, producto de una política económica neoliberal que se ha visto fortalecida en la transición, privilegiando la llegada de productos importados a un menor coste que los que se producen en la región.

Durante el inicio del primer gobierno de la Concertación, estos actores económicos, y los actores sociales mencionados, van a entrar en fuerte conflicto con el gobierno debido a la falta de acciones de democratización. El siguiente ejemplo es ilustrativo de lo que venimos exponiendo: CORBIOBIO (Corporación de la Región del Bío-Bío), institución que agrupa universidades, empresas regionales, gremios y asociaciones, cumplió diez años de existencia en 1994. Es una institución que nace con un claro sentido regionalista, y se propone, para el periodo, «superar la pobreza, modernizar el Estado, y lograr un desarrollo sustentable y equitativo»³³. Por ello su presidente, Claudio Lapostol, señalaba: «en el plano político, lo más importante es que los dirigentes de los partidos han aceptado que esto de regionalizar y descentralizar es fundamental para lograr el desarrollo social... hoy hay en el país conciencia de que una cifra importante de personas, vive en la extrema pobreza»³⁴.

La descentralización y la modernización del Estado han sido tareas muy lentas, aún pendientes en la sociedad chilena. Por esta razón, esta

³³ LAPOSTOL, C.: «Hay más líderes regionalistas», *Revista Tiempo Regional*, 37 (1994), pp. 27-28.

³⁴ *Ibid.*

organización regionalista se va a ver debilitada con el tiempo. En su periodo de surgimiento, CORBIOBIO llegó a contar con una revista regionalista de circulación mensual, *Tiempo Regional*, que expresaba la voz y los temas relevantes para la región ante el poder central.

Por su parte, el movimiento sindical, que se había visto severamente afectado en su capacidad negociadora y de defensa de los intereses de sus asociados durante la dictadura (la tasa de sindicación descendió del 34,2 por 100 en 1970, a 8,6 en 1983), tuvo que hacer frente, en el periodo de la transición, a varios conflictos sociales en Concepción, tales como los efectos de las crisis de la industria del carbón, del calzado, y de la industria pesquera. El entonces presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Concepción comunicaba a la prensa regional la conflictiva situación vivida: «Tenemos infinidad de empresas que pasan por malos momentos, por lo que estamos evaluando la situación ante la duda y desconfianza de los trabajadores por la posibilidad de perder sus empleos. Va a llegar el día en que vamos a tener mucha más gente en las calles que hasta ahora. Si en la última marcha tuvimos tres mil trabajadores, que no quepa la menor duda de que en la siguiente movilización van a ser muchos más»³⁵.

Durante este periodo inicial del cambio político, los partidos políticos comenzaron a tomar distancia y a alejarse del movimiento sindical³⁶, desarrollando dos mecanismos centrales de acción: no apoyaron sus demandas sociales y/o no intermediaban con el gobierno de la Concertación. En su entrevista, una líder sindical manifiesta:

«Soy demócrata cristiana, soy una dirigente social muy decepcionada de los partidos políticos en general y de los políticos, diría también. A veces, se dice que los trabajadores querían todas las soluciones de inmediato, pero no es verdad. Queríamos cambios, que se vieran muchos más cambios favorables a los trabajadores. Hoy día, los compañeros, te hablo de todos los partidos políticos en general, están donde están, gracias a nosotros».

La dirigencia sindical, durante este periodo transicional analizado, es un actor social que empieza a hacerse invisible, sin canales rea-

³⁵ Entrevista a Antonio Deij, presidente provincial en Concepción de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), *El Sur*, 26 de diciembre de 1994.

³⁶ Entrevista a María Luisa Burgos, dirigente sindical de la Universidad Católica de Chile, Consejera de la CUT Regional-Concepción (1991), en ROJAS, J.: «El movimiento sindical chileno en la transición a la democracia», *Proposiciones*, 22 (1993), p. 60.

les de diálogo con el gobierno, con los empresarios y con sus propios partidos políticos. De esta forma se aprecia la existencia de una tensión entre «el ser militante de partidos de la Concertación y la representación del dirigente sindical»: «... también esta situación se debe en buena medida a la actitud asumida por la dirigencia nacional del movimiento sindical. Yo creo que ha sido una actitud bastante reservada, respecto a como enfrentar este periodo de transición. No ha habido una actitud clara al respecto: de repente se confunde un poco el cuidar el proceso de transición a la democracia, con lo que son los intereses de los trabajadores. Una cuestión es ser militante de un partido que está hoy día en la Concertación del gobierno, y otra es ser dirigente sindical con representación»³⁷.

En la percepción de la evolución de la política y la acción sindical, los líderes sindicales pronostican: «Creemos que en el futuro la CUT deberá considerar su propia fuerza, sin esperar apoyo de partidos o del gobierno»³⁸. Durante la dictadura, los dirigentes de los trabajadores convocaron, en nombre del movimiento sindical, una serie de movilizaciones sociales —en las que tuvieron un rol protagonista— que pusieron fin a la misma y, así, el nuevo gobierno de la Concertación se sintió como propio. Sin embargo, los acuerdos del gobierno con el empresariado, a nivel nacional, lograron mayor fuerza, lo que contribuyó a aislar y debilitar el movimiento sindical. Esta serie de consecuencias y episodios van a hacer más difícil el poder generar organizaciones sociales sólidas, por la falta de apoyo del gobierno a los esfuerzos de sus aspiraciones gremiales. En su historia de vida, una de las responsables de la Vicaría de la Pastoral Obrera de Concepción, confirma:

«Yo estuve muchos años en la pastoral obrera, y fue mucho más fácil para nosotros formar sindicatos durante la dictadura. Entonces, la participación de la gente en las actividades era muy buena. Por ejemplo, la participación en las escuelas de verano y de invierno, fácilmente llegábamos a 1.400 personas inscritas. Durante la época de transición fue disminuyendo la participación poco a poco. Y hoy, simplemente, ya no se hacen por falta de interesados»³⁹.

³⁷ Entrevista a Roberto Caro, presidente de la Federación de Trabajadores de la Bebida y Consejero de la CUT Regional-Concepción (1991), en *ibid.*, p. 61.

³⁸ Entrevista a Arturo Deig, presidente provincial de Concepción de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) (1990), en *ibid.*, p. 60.

³⁹ Testimonio oral recabado por el autor de Edith Márquez, responsable de Capacitación Sindical, Vicaría de la Pastoral Obrera de Concepción.

Los gobiernos de la Concertación, en la década de los noventa, tampoco realizaron reformas significativas en temas de leyes laborales. El código laboral permaneció con las mismas dificultades para formar sindicatos, algo que impedía la negociación colectiva. Con la persistencia de la política económica cuidando los equilibrios macroeconómicos, el gobierno de la Concertación, en los primeros años de la transición de la dictadura a la democracia, estuvo más pendiente de no irritar al empresariado ni de crear incertidumbre económica que de apostar por reforzar el movimiento sindical. Las razones por las cuales no se destinaron fondos significativos a la sindicalización y a la capacitación pueden extraerse de los testimonios de los dirigentes sindicales: «El movimiento sindical y el movimiento poblacional, que fueron precisamente los movimientos que tenían más actoría política en el periodo dictatorial, fueron muy golpeados. Ahora, yo creo que el gobierno tenía muy buena disposición para trabajar con las mujeres, con los ambientalistas, con los grupos culturales, y por ello se crearon fondos de apoyo para promover este tipo de actividades, pero muy poco o nada para fortalecer el movimiento sindical»⁴⁰. En definitiva, la dirigencia política de la Concertación no se planteó una alternativa al modelo vigente; se conformó con pequeñas reformas que consolidaban el sistema político y económico heredado, abandonando así al movimiento sindical⁴¹.

También las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que habían contribuido de forma importante a la construcción de la sociedad civil durante la dictadura y a la reconstrucción del tejido social, entraron muy pronto en conflicto con las políticas sociales del gobierno, por su carácter asistencialista, que no crea movimiento social cuando se centra y concentra en un enfoque de abordaje de las necesidades humanas individuales y no en las demandas sociales que desecansan en una organización territorial.

El movimiento de pobladores y el de los estudiantes comienza, en cambio, a cobrar cierta fuerza, debido a la falta de protagonismo de

⁴⁰ Testimonio oral recabado por el autor de Mauricio Laborde, dirigente sindical y ONG, ex director del Servicio de Estudios Regionales.

⁴¹ GOICOVIC DONOSO, I.: «Refundación del capitalismo y transición democrática en Chile (1973-2004)», *Historia Actual Online*, 10 (2006), pp. 7-16. El autor señala que se ha debilitado el movimiento social que abrió las puertas a la democratización y que la desilusión y la impotencia no han incubado nuevas alternativas políticas que contribuyan al fortalecimiento del Estado democrático en Chile.

los movimientos sindicales y otros tradicionales. Y son estos nuevos actores los que se empiezan a visibilizar en el escenario regional durante los primeros años de la transición democrática en Concepción: «Yo voy hablar del movimiento vecinal. En este sentido ha sido muy importante el proceso de democratización de las juntas de vecinos que se inicia a partir de los años noventa, y que significó la democratización de todas las juntas de vecinos y la creación de nuevas, en sectores donde no existían. Surgiendo así nuevos procesos de identidad y nuevos tipos de organización»⁴².

La reaparición de los jóvenes en el escenario político se efectuó a través de diversas organizaciones juveniles que se coordinaron entre sí contra el Servicio Militar Obligatorio heredado de la dictadura militar. Se fueron desarrollando importantes campañas para reunir las cien mil firmas en contra del Servicio Militar Obligatorio, donde las organizaciones hicieron pública su intención de poner fin a la centenaria institución, a este impuesto deber para los jóvenes varones, especialmente para los provenientes del mundo popular⁴³. También reaparecen las movilizaciones estudiantiles a través de universidades locales-regionales, poniendo en la demanda el tema de la financiación pública de las universidades, las becas de estudio y, en general, las necesidades de mejora de las condiciones que ofrecen las universidades a sus nuevos alumnos⁴⁴. Estas dos manifestaciones de movilización colectiva logran «reencantar» a los jóvenes frente al desencanto político de la inicial transición⁴⁵, si bien de forma coyuntural.

⁴² Ponencia de la dirigente vecinal Delia Fuentes, presidenta de Unidad Vecinal 31-B Vegas de Nonguen, Concepción, en «Foro de dirigentes sociales», celebrado durante la escuela de invierno Reencuentro con Chile, 26 de agosto de 1993.

⁴³ *El Sur*, 25 de abril de 1994.

⁴⁴ La actividad estudiantil en la ciudad de Concepción ha sido muy dinámica, tanto durante como después de la dictadura. Su trayectoria desde la transición en MEZA SÁNCHEZ, A. R. M.: «Un tropezón no es caída. Historia del movimiento estudiantil en la Universidad de Concepción (1990-2000)», en ALFARO MONSALVE, K., *et al.*: *Historia sociopolítica del Concepción Contemporáneo. Memoria, identidad y territorio*, Concepción, Taller de Ciencias Sociales «Luis Vitale», 2006, pp. 199-256.

⁴⁵ Desencanto traducido en despolitización de amplios sectores de la ciudadanía, sobre todo de jóvenes, como analiza RIQUELME SEGOVIA, A.: «¿Quiénes y por qué “no están ni ahí”? Marginación y/o automarginación en la democracia transicional. Chile, 1988-1997», en DRAKE, P., y JAKSIC, I. (comps.): *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los 90*, Santiago de Chile, LOM, 1999, pp. 261-280. Como indica el autor, en las elecciones parlamentarias de diciembre de 1997 en Chile, alrededor de un millón y medio de potenciales votantes no participaron en la elección al no inscribirse

A partir de marzo de 1990, la clase política progresista asumió su quehacer político de construir la democracia bastante desligada de las organizaciones sociales, y, al parecer, por los indicadores políticos, económicos y sociales que ilustran el proceso de transición en Concepción y la región del Bío-Bío, no tuvo como referentes y objetivo la construcción de una democracia participativa ni un cambio en las condiciones estructurales del país.

Los Derechos Humanos: la lucha continúa desde la sociedad civil

Durante la dictadura militar (1973-1990), los defensores de los derechos humanos y los depositarios de la memoria fueron militantes de izquierda, partidos políticos de izquierda y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Con el inicio de la transición (1990-1994), en la región del Bío-Bío continuó firme esta lucha entre los enclaves autoritarios que bloqueaban la transición y los esfuerzos por derogar la Ley de Amnistía. Durante este periodo inicial, en la ciudad de Concepción y en la región, el énfasis puesto en este tema estuvo marcado por las temáticas del exilio, los «retornados», la construcción del primer monumento de derechos humanos en Concepción y en Chile, el intento del gobierno de Aylwin por lograr una Ley de Punto Final y la lucha contra la impunidad. Son estos hechos los que marcan los acontecimientos en la lucha por los derechos humanos⁴⁶, especialmente en Concepción y sus alrededores, uno de los lugares más golpeados por la represión dictatorial, región reconocida como núcleo de organización del movimiento obrero (carbonífero e industrial), de un poderoso movimiento estudiantil universitario y donde el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) catapultó sus principales cuadros.

en el registro electoral, mayoritariamente eran jóvenes entre dieciocho y veintinueve años, una actitud marcadamente generacional. Riquelme Segovia sostiene que «la percepción predominante en significativos sectores de la ciudadanía respecto a la impotencia de las instituciones representativas existentes frente a los llamados poderes fácticos ha incidido poderosamente en su conducta de ponerse al margen de los procesos políticos de la democracia transicional», en *ibid.*, p. 278.

⁴⁶ Mientras, el contexto nacional chileno vendrá marcado por la tensión entre el gobierno y la sociedad civil, debido a que el Estado buscó establecer una historia oficial a través de comisiones especiales: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), Mesa de Diálogo (2000) y Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (2004).

El evento regional llamado «Reencuentro con Chile», que tuvo lugar el 25 de agosto de 1993, en la Universidad de Concepción, es el primer encuentro de exiliados que logra convocar a los jóvenes en Concepción:

«Este encuentro viene a soldar el diálogo de dos generaciones entre los jóvenes de hoy y la generación que ha vivido proyectos de esperanza y procesos de dolor, producto del exilio y la distancia, y la violación de los derechos humanos durante la dictadura. En los años ochenta, hubo un enorme esfuerzo de la sociedad civil chilena —especialmente de los pobres de Chile y de sus organizaciones y el trabajo de tantos exiliados en la solidaridad internacional— por conquistar el camino a la democracia»⁴⁷.

Entre los asistentes e invitados a este «Reencuentro con Chile» en la Universidad de Concepción se contó con la presencia de dos ex ministros emblemáticos del presidente Salvador Allende, como lo fueron don Edgardo Enríquez, ex rector de la Universidad de Concepción, que impulsó la reforma universitaria del año 1970, y ex ministro de Educación en el momento del golpe militar; y don Jacques Chonchol, ministro de Agricultura, que profundizó la reforma agraria dignificando al campesinado, ministro en ejercicio durante el golpe de Estado del año 1973, ambos exiliados. Edgardo Enríquez expresó así su consideración y percepción sobre el exilio vivido:

«El exilio chileno se distinguió y prestigió al Chile democrático que lo había formado y preparado. De nada sirvieron las campañas montadas por la dictadura que pretendieron presentarlos como peligrosos criminales y terroristas. En los países que visitaba encontré en universidades y centros de estudios chilenos y chilenas, también desterrados desde hacía tiempo, cursando maestrías y doctorados, haciendo investigaciones, desarrollando tesis, dando clases y conferencias, asistiendo a hospitales y laboratorios, etcétera. Los que ya hemos retornado y quienes lo hagan en el futuro, venimos a cooperar, a ayudar, a enseñar lo que aprendimos y adquirimos, no a rivalizar con nadie. Mucho hemos sufrido en todos estos años, no queremos inquietar ni provocar dolor alguno a quienes también sufrieron en el interior de Chile»⁴⁸.

⁴⁷ CASTRO, B.: «Discurso inaugural», en «Encuentro con Chile», Universidad de Concepción (Chile), 25 de agosto de 1993.

⁴⁸ ENRIQUEZ, E.: «Discurso y saludos», en «Encuentro con Chile», Universidad de Concepción (Chile), 25 de agosto de 1993.

El ex ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, expuso sus impresiones respecto al reencuentro con el país y sus gentes: «Chile está olvidando lo que ha sido su historia, dado que no conoce lo que realizó en Chile el Gobierno de Salvador Allende, o lo conoce tergiversado»⁴⁹, y agregó: «... veo un gran alivio de la gente por haber recuperado la libertad, pasó el miedo de que lleguen los soldados en la noche y arrasen con la gente»⁵⁰.

Durante el inicio del gobierno del presidente Aylwin se creó la Oficina Nacional de Retorno, regresando al país sesenta mil chilenos⁵¹. Esta oficina cerró el 20 de agosto de 1994, quedando todavía 700 mil chilenos exiliados que esperaban su retorno al país⁵².

También en este periodo se realiza en Concepción el primer monumento de Chile de homenaje a los caídos en dictadura militar, organizado por el Centro de Estudios Interdisciplinarios ITATA y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. «Están dispersos en las raíces de la patria» fueron las palabras que inauguraron el monumento a la memoria colectiva, en los Jardines de la Universidad de Concepción. Este monumento expresaba el esfuerzo de las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos por crear una obra que fuera un homenaje a los 58 estudiantes ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de la Universidad de Concepción, producto de una creación colectiva en el diseño y la ejecución a cargo del escultor Lautaro Labbé, a modo de perpetuar la memoria⁵³. Esta necesidad de perpetuar la memoria la expresa Marta Godoy, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, en los siguientes términos: «Porque la memoria es mantener en la mente de la gente a personas que fueron mártires y muchas veces héroes que lucharon contra la dictadura»⁵⁴.

La lucha contra la Ley de Punto Final que trató de imponer el gobierno en 1993, y la lucha contra la impunidad marcan en Concep-

⁴⁹ Entrevista por su visita al «Encuentro con Chile», Universidad de Concepción (Chile), del 26 de agosto de 1993, recogida en el Diario *El Sur*.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *La Nación*, 3 de agosto de 1994.

⁵² *La Nación*, 24 de enero de 1994.

⁵³ Véase el texto de Mario Garcés en este mismo *dossier* sobre la problemática de la Memoria en Chile.

⁵⁴ Testimonio oral, recabado por el autor, de Marta Godoy, presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Concepción (Chile).

ción el fin del primer gobierno de la Concertación. El proyecto de ley proponía poner fin a los juicios sin garantizar el establecimiento de la verdad, y menos la justicia, lo que generó la oposición del Partido Socialista y de las organizaciones de derechos humanos. Así lo recuerda en su entrevista de vida la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la región del Bío-Bío:

«Se intentó dictar la primera ley de impunidad en el gobierno democrático, que fue la llamada Ley Aylwin, el objetivo era terminar con todos los procesos, acelerar y entregar a los familiares una información de nuestros familiares, como en qué lugar habían muerto, y punto, dando por terminado el caso. Nosotras hicimos huelgas de ayuno, no fueron huelgas de hambre, y presionamos y logramos, por fin, que el presidente Aylwin retirara este proyecto de ley»⁵⁵.

La lucha contra la impunidad, por hacer justicia, siguió siendo una tarea importante de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos: los presos políticos, el 11 de marzo de 1990, eran 350 en las cárceles de Chile⁵⁶. Es importante enunciar que también se comprobaron casos de tortura (140) durante el periodo de transición 1990-1994, la gran mayoría cometidos por carabineros de Chile⁵⁷. En

⁵⁵ Testimonio oral, recabado por el autor, de Mercedes Sánchez, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Región del Bío-Bío. El estudio y trayectoria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción (AFDD Concepción), organización formada principalmente por mujeres que asumieron la tarea de recuperar a sus familiares en un amplio movimiento antidictatorial, en ALFARO MONSALVE, K.: «De la memoria a la política. Génesis de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción (1978-1983)», en ALFARO MONSALVE, K., *et al.*: *Historia sociopolítica...*, *op. cit.*, pp. 165-197.

⁵⁶ Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Santiago de Chile (1994), y diario *La Época*, 22 de enero de 1994.

⁵⁷ COMITÉ DE DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU): «Informe de Derechos Humanos, 1990-1994», Santiago de Chile (1994). Sobre esta problemática Pedro Rosas señaló: «La lucha y acción política juvenil, rebelde y clandestina, que se prolongó más allá del arribo formal de la democracia, tuvo como respuesta una acción represiva global por parte de los gobiernos de la concertación. El resultado de la política de “pacificación” de los grupos rebeldes y de “seguridad ciudadana” para combatir la delincuencia subversiva arrojó, entre 1990 y 1994, además de los 140 casos de tortura, 96 muertes en procedimientos policiales. En el mismo periodo habían sido detenidas 170 personas por actividades de motivación política, la mayoría tenían entre dieciocho y veintitrés años, y siendo catalogados de terroristas, se les aplicó un “régimen especial” de tratamiento político-jurídico y penitenciario y el internamiento en una cárcel

este periodo se condenó a Manuel Contreras, director de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, durante la dictadura militar), y a Pedro Espinoza. El primero, como autor intelectual del homicidio del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en Washington, y el segundo, como coautor del homicidio. Esta condena se dictó gracias a la presión de Estados Unidos, que dejó fuera de la Ley de Amnistía este homicidio.

El caso de Carmelo Soria tuvo tintes distintos. Para el caso de la muerte del diplomático español, asesinado por agentes de la DINA al inicio de la dictadura militar, se aplicó la Ley de Amnistía, generando un repudio nacional e internacional frente al hecho: «El gobierno español examinará con la familia Soria las posibilidades de apelación a la Corte Suprema en Chile»⁵⁸, explicó el portavoz de asuntos exteriores del gobierno español. Al mismo tiempo, el secretario regional de la ONU, Boutros-Ghali, mencionó que «la ONU se siente afectada por el crimen de Soria»⁵⁹.

La conquista de mayor justicia se expresa en la circunstancia de que, a fecha de 31 de diciembre del 2008, en los tribunales de Justicia de Chile existían 338 procesos judiciales en curso relativos a 1.128 víctimas⁶⁰. Los derechos humanos siguen siendo un tema pendiente de la transición, como el esclarecimiento de la verdad y, en algunos casos, la aplicación de justicia a pesar de algunos avances, además de la puesta en marcha de «programas de reparación» realizados por el gobierno⁶¹.

de alta seguridad donde se concentró a los entonces jóvenes integrantes del FPMR, Lautaro y del MIR». La liberación de los presos políticos sólo sería posible tras aprobarse dos proyectos de ley durante el año 2004 y 2005. Véase ROSAS ARAVENA, P.: «Jóvenes, rebeldes y armados. Una mirada a la identidad y la memoria de los jóvenes rebeldes durante la transición», *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, 12-2 (2008), pp. 90-122.

⁵⁸ *La Nación*, 31 de diciembre de 1993.

⁵⁹ *La Nación*, 19 de marzo de 1994.

⁶⁰ NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: *Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 A) Anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos*, Chile, 2009.

⁶¹ Las medidas de reparación del Estado de Chile han consistido, en esencia, en que entre el 2000 y 2008 se han destinado, aproximadamente, 113 millones de dólares a pensiones de reparación para los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Además, entre 2005 y 2008 se han entregado más de 103 millones de dólares, a través de bonos, a hijos de estas víctimas que no habían recibido reparación o la habían recibido parcialmente. En el mismo periodo, las pensiones para las víctimas de prisión política y tortura han ascendido a más de 195 millones de dólares.

Conclusión

Chile, país de alto centralismo y de actuaciones homogeneizadoras, impuso un diseño de transición a escala nacional, al tiempo que la elite central lo hizo sobre el poder local y regional que, en el caso de Concepción y la región del Bío-Bío, y a pesar de sus esfuerzos en pos de construir ejes particulares de desarrollo regional y de reconstrucción después de la dictadura, devino finalmente en una situación donde la posición de Santiago de Chile, la capital, y del Estado central, marcó la relación de dominio respecto a la transición con esta región y su capital, Concepción. La *Estrategia de Desarrollo de la Región* contemplaba, entre otras, el dinamismo sociocultural y la profundización democrática a partir de la potenciación de la sociedad civil, pero la transición en Chile y, en consecuencia, en Concepción, no interpretó a los sectores populares; los canales de participación fueron pocos y poco expeditos; los temas y términos del debate no profundizaron en la situación real del país y la región; y las organizaciones sociales-populares estuvieron cada vez más excluidas del quehacer político y económico, procesos que coadyuvaron al fenómeno de una gran apatía generalizada. El tejido social en la sociedad civil penquista aparece desarticulado, con un movimiento sindical débil y con mujeres y jóvenes desdibujados por no tener participación, generando así un sujeto social diverso y heterogéneo. Frente al declive de estos agentes sociales, los partidos políticos han asumido «un rol protagónico que no guarda relación con el rol y protagonismo que tuvo el movimiento social antes que asumiera el gobierno de la Concertación; es más, existe una división cada vez más evidente entre la clase política y la sociedad civil y sus organizaciones»⁶². En definitiva, aparece una ar-

Entre 1996 y 2008, la reparación económica para los exonerados políticos ha alcanzado más de 1.205 millones de dólares. En total, el esfuerzo del Estado en los periodos señalados ha superado los 1.600 millones de dólares. Información extraída de NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: *Informe nacional...*, op. cit. Para más información véase la memoria de licenciatura de GONZÁLEZ TARIFEÑO, F.: «Derechos humanos, ayer y hoy en Chile. Comparación de la situación de los derechos humanos desde la dictadura hasta nuestros días, y sus efectos en las personas dañadas», dirigida por Bernardo Castro Ramírez en el Departamento de Sociología y Antropología, Universidad de Concepción (Chile), 2009.

⁶² CASTRO, B.: *El desarrollo regional desde el mundo social*, Concepción, Centro ITATA-Centro Interdisciplinario de Estudios y Desarrollo Regional, 1992, p. 190.

ticulación muy fuerte entre el Estado, partidos políticos concertacionistas y empresariado, que va a caracterizar la gobernabilidad durante el periodo de transición, donde el movimiento social, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, figura muy desdibujado y sin protagonismo social. El déficit de la transición, la desmovilización al final de estos cuatro años, se extiende hasta nuestros días, problemática sólo analizada por algunos dirigentes de la Concertación en un balance de veinte años de su existencia, en el que destaca la manifestación del dirigente del Partido Socialista, Germán Correa, ex ministro del Interior durante el año 1994:

«Un ciudadanía que quería ser y hacer, la dejamos en cambio en la galería; como observadora de lo que hacíamos, de cómo reconstruíamos la democracia reconquistada y no como actor central, tal como lo había sido para poner fin a la dictadura. [...] Dejamos así a la Sociedad Civil mirándonos por la ventana. Es desmovilización, es lo que muchos han señalado como el gran déficit de participación ciudadana que tuvo la reconstrucción de la democracia [...]. Los partidos abdicaron transitoriamente de su función de canalizar las inquietudes y demandas sociales hacia el Estado y el gobierno, fueron más bien apaciguadores de la demanda social [...]. Lo cierto es que sí hubo déficit de la participación ciudadana, y así fue sentido por la gente»⁶³.

Esta misma gente en Chile se fue constituyendo, a lo largo de los veinte años de gobierno de la Concertación, en una mayoría cultural y políticamente progresista, si bien los déficits de la transición durante estos años son tan profundos, a partir del diseño inicial de los cuatro primeros años, que se da la paradoja que hoy en el país, después de cincuenta años, ha vuelto a triunfar un candidato presidencial de la derecha⁶⁴.

⁶³ BASCUÑAN, C.; CORREA, G.; MALDONADO, J., y SÁNCHEZ, V. (eds.): *Más acá de los sueños, más allá de lo posible. La Concertación en Chile*, vols. 1 y 2, Santiago de Chile, LOM, 2009.

⁶⁴ El 17 de diciembre del 2010, Sebastián Piñera, empresario, candidato de la derecha agrupada en la Coalición por el Cambio que abarca los partidos Unión Democrática Interdependiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), que fueron el soporte político durante la dictadura de Pinochet, ganó las elecciones presidenciales con un 51,5 por 100 de los sufragios, frente al candidato del oficialismo, Eduardo Frei, que obtuvo un 48,5 de los sufragios. Se da la paradoja de que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tiene una aprobación de su gestión del 80 por 100, y el gobierno de la Concertación de un 60 por 100 y, sin embargo, triunfa la derecha.

Las teorías de la transición parecen ser insuficientes para explicar la falta de democratización de las sociedades a partir de la mirada de los actores sociales. Por eso, desde esa mirada y desde la sociedad civil se puede contribuir a la revitalización de las teorías de la transición y a la reconstrucción democrática del espacio público⁶⁵, donde las acciones locales y regionales, articuladas en una estrategia colectiva, pueden generar un nuevo espacio público democrático.

⁶⁵ Sebastián Cox sostiene que ni el Estado ni el mercado son capaces por sí solos de enfrentar, y menos de superar, uno de los más urgentes desafíos de nuestras sociedades: el desarrollo sostenible, con equidad en democracia. La participación consciente, organizada y responsable de la ciudadanía y de la sociedad civil en los asuntos de interés público se constituye así en elemento constituyente y esencial de la democracia. Y ello tanto en el plano local como nacional. Véase COX, S.: «Protagonismo ciudadano y construcción de lo público: extensionismo jurídico y transformación social», en LEÓN ARAVENA, J., *et al.* (eds.): *Discursos y prácticas de ciudadanía. Debates desde la región del Bío Bío*, Hualpén, Universidad del Bío-Bío, 2006, pp. 147-155.